

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	María Victoria del Carmen Bernal Palacio
DEMANDADO	Colpensiones
Litisconsorte necesaria por pasiva	Miriam Lucila Bonilla Pinzón
PROCEDENCIA	Juzgado 10 Laboral del Circuito
RADICADO	05001 3105 010 2011 01382 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 52 de <b>2023</b>
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de sobreviviente compañeras permanentes de afiliado fallecido – relación simultanea
DECISIÓN	Confirma sentencia

Hoy, **veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo, y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento con relación al recurso de apelación presentado por el apoderado de **Colpensiones**, y el grado jurisdiccional de consulta en favor de esta entidad, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito, dentro del proceso promovido por **María Victoria del Carmen Bernal Palacio**, donde se integró como **litisconsorte necesaria por pasiva** a la señora **Miriam Lucila Bonilla Pinzón**. Radicado único nacional 05001 3105 **010 2011 01382** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de las restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº 006**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

## **Antecedentes**

Se orientan las pretensiones de la demandante a que se declare que le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su compañero permanente, Ángel Alberto Pinzón Castellanos, en consecuencia, se condene al pago de la prestación desde el 30 de enero de 2008, fecha de su deceso, con las mesadas ordinarias y adicionales, los intereses moratorios, indexación y costas del proceso.

En sustento de ello y para lo que interesa a esta instancia, afirmó que, Ángel Alberto Pinzón Castellanos, falleció el 30 de enero de 2008, cuando se encontraba afiliado al ISS hoy Colpensiones. Que se conoció con el señor Alberto en 1976 y transcurrido un año iniciaron una convivencia, compartiendo lecho, techo y mesa, de manera continua hasta la fecha de su deceso. Unión de la cual procrearon dos hijas, María Victoria y Andrea Viviana Pinzón Bernal, ambas mayores de edad. Que el 17 de mayo de 2008, se presentó a reclamar la pensión de sobrevivientes por la muerte de su compañero, negada en Resolución 029559 del 30 de octubre de 2009, bajo el argumento que no se había podido establecer la convivencia, adicional a que también acudió a pedir la pensión la señora Miriam Lucila Bonilla Pinzón Castellanos.

En auto del **08 de noviembre de 2008**, se admitió y ordenó dar trámite a la acción, vinculándose como interviniente excluyente a la señora **Miriam Lucila Bonilla Pinzón Castellanos**, debidamente enterada de la actuación la entidad demandada, **Colpensiones**, allegó pronunciamiento, admitiendo la fecha del deceso del señor Ángel Pinzón, la afiliación al ISS, la reclamación elevada por la actora y el contenido del acto administrativo que negó la prestación. Frente a los restantes supuestos de hecho, esgrime que no le constan. Se **opuso a la**

**prosperidad de las pretensiones** y propuso como excepciones tendientes a enervarlas las que denominó: inexistencia de la obligación, pago, compensación, prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación de condenar al pago de intereses moratorios e indexación e imposibilidad de condena en costas.

El proceso fue tramitado y decidido, no obstante, al conocer esta Sala del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia, se evidenció una irregularidad que viciaba la actuación, consistente en la indebida notificación de la señora **Miriam Lucila Bonilla Pinzón Castellanos**, al haberse remitido la citación a dirección diferente a la allegada para los efectos por Colpensiones, por lo que en proveído del 7 de abril de 2017, se declaró la nulidad de lo actuado, disponiéndose por demás, la precisión de la calidad en que se vincula a la misma al trámite al estar disfrutando el 100% de la pensión objeto de controversia. Así en auto del **11 de mayo de 2017**, el despacho de conocimiento ordenó la citación de la señora Pinzón Castellanos, en calidad de **litisconsorte necesaria por pasiva** y al no haber comparecido, a pesar de haberse intentado su citación, dispuso su emplazamiento, nombrándole curadora ad litem, quien procedió a contestar el escrito introductor, admitiendo la data del deceso del señor Ángel, la vinculación de este al ISS, la reclamación de la pensión de sobrevivientes por parte de la señora Victoria y la negativa dada a la misma por la administradora, los restantes supuestos o no le constan o no constituyen hechos. **Resistió las pretensiones.**

La primera instancia **culminó con sentencia** proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito, en la que condenó a Colpensiones a reconocer y pagar pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor Ángel Pinzón Castellanos, a favor de María Victoria Bernal Palacio en un 72,35% sobre el 100% de la mesada pensional, en

condición de compañera permanente del causante, a partir del 30 de enero de 2008. Calculó el retroactivo a noviembre de 2022 en la suma de \$102.047.489,00, valor sobre el cual autorizó los descuentos a salud y la indexación. La masada a seguir reconociendo será de \$723.500,00 para Victoria Bernal Palacio y \$276.500,00, para Lucila Bonilla Pinzón, la cual, se acrecerá para cada una de ellas según se extinga el derecho de la una o de la otra. Autorizó a la entidad a efectuar los trámites necesarios a fin de compensar las sumas pagadas a Miriam Bonilla en los términos de la Resolución 035062 del 22 de noviembre de 2010, con las mesadas que a futuro reciba. Declaró no probada la excepción de prescripción e impuso costas a cargo de Colpensiones y en favor de la demandante.

Como sustento de su decisión, manifestó el fallador, después de citar la normatividad que determina los requisitos para obtener el pago de la pensión de sobrevivientes, así como la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, cuando refiere que no se exige tiempo de convivencia cuando de afiliado se trata, haciendo claridad que se atiene a lo establecido en la sentencia SU149-2021, que determina la acreditación de una convivencia de 5 años, la cual, para el caso, de acuerdo a los medios de convicción aportados, se acredita al evidenciarse que la señora María Victoria Bernal Palacio, la mantuvo en forma efectiva y afectiva con Ángel Alberto Pinzón Castellanos, por lo menos desde el año 1974 hasta el mes de enero de 2008, con una comunidad de vida, con vocación de permanencia, apoyo mutuo y ánimo de conformar una familia, relación que se desenvolvió paralelamente con la sostenida con Miriam Lucila Bonilla Pinzón, al ser claros los testigos en indicar que el causante siempre retornaba al hogar conformado por la demandante, en el cual procreó dos hijas, siendo de público conocimiento que tenían una comunidad de vida con ella, entendiéndose la relación paralela en razón de su trabajo, el cual le implicaba transitar

dentro del territorio nacional por diversos días, resaltando que para la época en la que se negó la pensión de sobrevivientes a la demandante, el ISS hizo una investigación administrativa en la que la misma declaró y expuso circunstancias fácticas iguales a las narradas en esta demanda, quedando así demostrada la convivencia real y efectiva, la que hace que la actora sea beneficiaria de la pensión que depreca, lo que también sucede con María Pinzón, al no existir medio de convicción que desvirtúe la declaración extraproceso rendida por el causante, según la cual había convivido con ella por más de 9 años, por tal, para el cálculo de la porción a reconocer por mesada pensional, tuvo la unión como consecutiva por espacio de 47 años y al haber convivido la señora Bernal por 34 años y la señora Bonilla por 13, le correspondía a la primera un 72,35% y, a la segunda un 27,65%. Al no haber hecho aparición el fenómeno extintivo de la prescripción al haberse resuelto el recurso de apelación contra la Resolución 29559 del 30 de octubre de 2009, el 17 de diciembre de 2013, y la demanda radicarse el 28 de octubre de 2011, dispuso el pago de la prestación a partir del 30 de enero de 2008, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre.

Teniendo en cuenta que Colpensiones procedió al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, a Miriam Lucila Bonilla Pinzón a partir de la fecha de fallecimiento del causante, de conformidad con la Resolución No.035062 del 22 de noviembre de 2010, autorizó a que realice los trámites necesarios para compensar las sumas de dinero pagadas en exceso con las mesadas que a futuro reciba.

Inconforme con lo decidido, interpuso recurso de apelación **Colpensiones**, solicitando la revocatoria, para ello esgrime que la señora Victoria no es merecedora de la pensión de sobrevivientes al existir en la prueba documental y testimonial contradicciones, al admitirse que el

señor Ángel se ausentaba por varios interregnos, lo cual, permite inferir que para la data de la muerte no se acreditaban los 5 años de convivencia, adicional a que si bien la señora Lucila se presentó a reclamar y la entidad la asistió de derecho al pago de la pensión, lo cierto es que ante la controversia la misma no se hace merecedora del derecho. Solicita se valoren minuciosamente los medios de convicción aportados y, con ello se nieguen las pretensiones; no obstante, en caso de confirmarse requiere para que se declare que no le corresponde a la entidad el pago del retroactivo sino a la señora Lucila, al habersele dado el 100% de la prestación como única beneficiaria.

Por último, reclama sean revocadas las agencias en derecho, en tanto, el acuerdo para su fijación determina que van de 1 a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, debiéndose tener en cuenta, por consiguiente, solo un mínimo.

De la oportunidad para presentar **alegaciones** hizo uso **Colpensiones**, quien después de transcribir la parte resolutive de la sentencia, los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, y apartes del contenido de la resolución 029559 del 30 de octubre de 2009, manifiesta que la negativa inicialmente presentada a la actora, se ajusta a la ley y, no se logra desvirtuar en primera instancia, por lo que solicita revocar el fallo de instancia especialmente cuando se otorga el derecho a la demandante María Victoria Del Carmen Bernal Palacio en el 72.35% sobre el 100% de la mesada pensional, en su condición de compañera permanente del referido causante, pues, no logró acreditar en sede administrativa ni judicial que efectivamente existió convivencia con el señor Ángel Alberto Pinzón Castellanos, no menos de 5 años anteriores a la fecha de su deceso.

**Demandante,** solicita una valoración minuciosa y detenida de las pruebas que reposan en el proceso, al establecerse con ellas que la demandante convivió con el causante de manera ininterrumpida desde el año 1976 hasta el día 30 de enero de 2008, fecha de su fallecimiento, en calidad de compañera permanente, convivencia que tenía un ánimo y vocación de permanencia, ayuda mutua y cohabitación, relación de la cual se procrearon dos hijos, acreditándose los requisitos para hacerse beneficiaria de la prestación.

En orden a decidir, basten las siguientes,

### **Consideraciones:**

Como hechos debidamente acreditados en los autos se tienen: Ángel Alberto Pinzón Castellanos falleció el 30 de enero de 2008; que la señora María Victoria del Carmen Bernal Palacio, presentó solicitud de reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes el 17 de marzo de 2008, negada en Resolución No.029559 del 30 de octubre de 2009, indicándose que dicho derecho también fue requerido por Miriam Lucila Bonilla Pinzón en la ciudad de Bogotá, decisión frente a la cual se presentaron los recursos de Ley, desatados de manera adversa a sus intereses, el de reposición en Resolución 32007 del 24 de noviembre de 2011 y el de apelación en Resolución VPB8017 del 17 de diciembre de 2013, indicándose en esta última que: *si bien existió convivencia al momento del deceso entre el pensionado fallecido y la señora MARIA VICTORIA DEL CARMEN BERNAL PALACIO, en calidad de compañera, también convivió con la señora MIRIAM LUCIA BONILLA PINSON, también en calidad de compañera, manifestaciones hechas por el señor ANGEL ALBERTO PINSON CASTELLANOS, en declaraciones juramentadas en la Notaria 64 de Bogotá, Notaria 24 de Medellín, de forma ininterrumpida y permanente;* que por medio del acto administrativo 035062 del 22 de noviembre de 2010, se otorgó la pensión de sobrevivientes a Miriam

Lucila Bonilla Pinzón desde el 30 de enero de 2008, indicándose en dicho acto, frente al requisito de semanas:

Que obra Historia laboral del asegurado ANGEL ALBERTO PINZON CASTELLANOS, en la que consta que cotizo para los riesgos de I.V.M, desde el 30 de abril de 1971 hasta el 30 de enero de 2008, un total de 864 semanas, de las cuales 74 se encuentran dentro de los últimos 3 años anteriores al fallecimiento, cumpliendo con el requisito de fidelidad que para este caso es de 435 semanas cotizadas.

Y, frente a la calidad de beneficiaria de la señora Lucila:

Que en el presente caso se pudo establecer que la señora MIRIAM LUCILA BONILLA PINZON conforme a las declaraciones obrantes en la carpeta pensional convivió con el causante ANGEL ALBERTO PINZON CASTELLANOS, hasta el día de su fallecimiento, por lo tanto se hace procedente conceder la pensión de sobrevivientes.

En tales condiciones, teniendo en cuenta la inconformidad planteada al sustentar la alzada y el grado jurisdiccional de consulta, **se circunscribe el problema jurídico** en esta instancia a establecer, si la señora Victoria Bernal Palacio, satisface las exigencias legales y jurisprudenciales para hacerse acreedora de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su compañero permanente, en caso afirmativo, se analizará el valor a cancelar por concepto de retroactivo y la procedencia o no de la disminución de las agencias en derecho, ello no sin antes definir si es procedente que la señora Lucila, siga con el pago de la prestación reconocida vía administrativa.

Pues bien, para resolver la controversia, basta con indicar que según la tesis actual de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, la norma con la cual se debe analizar el derecho es la vigente para la fecha del deceso, por lo que al haber fallecido el señor Ángel Alberto el 30 de enero de 2008, es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, modificadorio del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, el cual, si bien no exige en su literalidad para la compañera **del afiliado fallecido**, como requisito



objetivo, la acreditación de convivencia por un periodo específico, pues ello solo se precisó respecto al pensionado:

*"En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del **pensionado**, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;"*

Lo que se ha expuesto, entre otras, en las sentencias SL1720-2020, SL3626-2020, SL1698-2021, SL1905-2021, SL2820-2021, SL4318-2021, SL973-2022, SL754-2022 y SL273-2022; lo cierto es, que atendiendo a lo considerado por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación del 21 de mayo de 2021, el término de convivencia mínimo debe ser de 5 años continuos con anterioridad a la muerte tanto del pensionado como del afiliado.

Sobre el particular el órgano de cierre constitucional reflexionó que la teoría acogida por la Corte Suprema de Justicia desconoce el principio de igualdad y de sostenibilidad financiera del sistema pensional, advirtiendo:

*"Sobre la violación directa de la Constitución, la Sala sostuvo que se desconoció el principio de igualdad con la interpretación del requisito de convivencia previsto en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. La distinción introducida por la Corte Suprema de Justicia, al disponer que la exigencia al cónyuge o la compañera o compañero permanente de acreditar el mínimo de cinco años de convivencia anteriores al fallecimiento del causante solo era aplicable cuando estos fueran pensionados, mas no en el caso de los afiliados, no armoniza con los propósitos de la pensión de sobrevivientes ni con los del requisito de convivencia. Así mismo, esa diferenciación carece de una justificación objetiva que atienda al principio de igualdad, por lo que resulta arbitraria."*

Bajo tales supuestos se procede entonces al estudio del material probatorio, teniéndose que, en la investigación administrativa adelantada por la entidad frente a la reclamación efectuada por la señora Bonilla

Pinzón, se indica que aportó declaración extra juicio del afiliado rendida el 30 de abril de 2004 en el que manifestaba que convivía con la misma desde hacía 9 años; que la solicitante fue beneficiaria en salud del afiliado desde marzo hasta noviembre de 2007 y que de la misma forma existe una declaración extra juicio del causante del 27 de diciembre de 2007 en la que manifestó que convivía con María Victoria del Carmen Bernal Palacio desde hacía 34 años, concluyendo, que debía ser la justicia ordinaria la que dirima el asunto.

En declaración realizada ante el ISS el 6 de julio de 2009, manifestó la demandante que comenzó convivencia con Alberto desde el mes de agosto de 1974 y que desde entonces siempre fueron conocidos como pareja ante la sociedad y nunca se separaron, que el afiliado trabajó como conductor de buses, que de su unión nació María Victoria el 10 de enero de 1978 y Andrea Viviana el 9 de diciembre de 1984, y que ella era la beneficiaria en salud.

El 27 agosto de 2003, 13 de enero de 2006 y 27 de diciembre de 2007, María Victoria Bernal Palacio y Ángel Alberto Pinzón, declararon ante diferentes notarias, que hacía más de 28, 30 y 34 años, respectivamente, convivían bajo el mismo techo y en forma permanente e ininterrumpida, hasta dicha fecha.

En interrogatorio de parte rendido por la señora Victoria Bernal, en el transcurso del proceso, expuso que vivió en unión libre con el señor Alberto Pinzón, sin existir separación en dicha relación, perdurando la misma hasta la fecha de su deceso; que en dicha unión nacieron 2 hijas. Que Alberto la llamó cuando estaba en Bogotá y le dijo que estaba muy mal de salud, a lo cual le manifestó que se fuera para el hospital que ella ya iba para allá, cogiendo transporte de Medellín a Bogotá a las doce de

la noche y que cuando iba viajando su hija le aviso, como a las 7 de la mañana, que su papá había fallecido, por lo que está también se dirigió para Bogotá, cremaron el cadáver y retornaron a Medellín con él.

Por su parte **Nora Patricia Torres Presiga**, manifestó conocer a Alberto Pinzón en el matrimonio de la hija de este con un hermano de ella el 30 de enero de 2002. Que después de la fecha la unión siguió viendo a la pareja conformada por Alberto y Victoria, en tanto, su hermano y la cuñada, se fueron a vivir con la pareja en septiembre cuando nació su primer hijo, residiendo ella en el segundo piso de la casa donde estaba la familia, por lo que tenía contacto directo y frecuente con ellos. Que el señor Ángel Alberto vivió en dicho hogar hasta la fecha de su deceso y que, si bien se asuntaba por 8 o 15 días, obedecía al trabajo que realizaba, conductor de la Flota Magdalena, en el que le tocaba cubrir diferentes rutas en distintas ciudades, finalizando cada recorrido en la casa de él y Victoria, sin constarle que el señor Alberto tuviese otro tipo de relación sentimental fuera de la sostenida con Victoria, la cual, le consta desde que los conoció; que Alberto estuvo enfermo de diabetes, fue incapacitado y luego, cuando estaba en Bogotá, se puso mal y fue a la clínica, falleciendo en dicho lugar de infarto; que Alberto se encontraba en Bogotá por razones de trabajo cuando su deceso, encargándose de todo lo del sepelio su hija, la cual viajó con su madre a Bogotá cuando él avisó que se encontraba delicado de salud. Que cuando Alberto estaba enfermo, ella se vino de la finca a cuidarle el niño de su cuñada, para poder que viajara a Bogotá; que el hermano del señor Alberto, esto es, el tío de su cuñada fue el que le avisó del deceso.

**Pedro José Ríos Bedoya**, manifestó que conoció a Alberto en 1992, porque trabajaba en la empresa Flota Magdalena y él era el encargado de manejar la agencia de Rionegro, retirándose de dicha compañía en 1998,

fecha en la cual no volvió a ver al señor Alberto hasta el 2001, cuando montó un negocio de helados en Cabañitas, viviendo Alberto con Victoria, diagonal a dicho establecimiento, fecha a partir de la cual ya lo veía frecuentemente. Manifiesta que conoció a Victoria en el 2001 cuando llegó a Cabañitas y que Alberto vivió con esta y sus hijas, Vicky y Andrea, en dicho domicilio hasta el 2007, fecha para la cual se mudaron al barrio Florida; no obstante, seguían visitando su establecimiento cada 15 o 20 días o cada mes; que no sabe que el mismo tuviese otra relación; que este falleció en Bogotá y fue su hija la encargada del sepelio y de traerse las cenizas. Declara que el señor Alberto en la empresa tenía un rodamiento que cubría la mitad del país, Popayán, Cali, Pasto, Buenaventura y Bogotá, pudiéndose ausentar este, dependiendo del recorrido que le tocara entre 3, 8 o 15 días; que los conductores no se quedaban muchos días en una sola ciudad, máximo dos, pues, por ejemplo, ellos iban de Medellín a Cali, y al otro día salían para otra ciudad; que Alberto podía permanecer en su casa, uno, dos, cinco o seis días si el carro estaba varado o en reparación mecánica; que no sabe este cada cuanto retornaba a su hogar Alberto, al depender esto de la necesidad de la empresa, en tanto, podía viajar de Medellín a Cali y desde ahí salir para otra ciudad o regresar a Medellín. Aduce que le consta que Alberto y Victoria eran pareja, pues, los veía en tal rol, adicional a que iban como pareja a comer helado a su negocio, sin constarle ningún tipo de separación; que no sabe si Victoria estaba en Bogotá cuando falleció Alberto, pero que la hija de este después le contó que su mamá había viajado un día antes o el día en que se enfermó a dicha ciudad; que Alberto sufría de diabetes y estuvo incapacitado 4, 5 o 6 meses, tiempo durante el cual estuvo en Medellín, no obstante, no recuerda en qué fecha exacta fue eso, pero sí que fue después del 2007. Finalmente, aduce que nunca le escuchó al señor Alberto mencionar a la señora Bonilla.

En el expediente administrativo y en la demanda, se advierte la declaración extrajuicio rendida el 20 de febrero de 2008, por **Diego Humberto García Presiga**, exhibiendo que conoció de trato y comunicación desde hacía 12 años al señor Alberto Pinzón, constándole que para la fecha de su deceso convivía en unión libre y desde hacía 34 años con la señora Victoria, relación de la cual nacieron dos hijas, supuesto que confirmó la señora **Maribel Ortiz García**, al ratificar lo dicho por el señor Humberto al conocer a la pareja conformada por Alberto y Victoria desde hacía 10 años.

Con el escrito inaugural, también se adjuntó la declaración de **Patricia del Socorro Ruiz Monsalve**, en la que manifestó que conoció al causante durante 15 años, que convivió con la demandante y tuvo dos hijas, que no conoció otros hijos ni beneficiarios de mejor derecho.

Ahora, no puede perderse de vista que en la carpeta administrativa se evidencia declaración rendida por el señor Alberto el 30 de abril de 2004, en la que consignó que vivía con la señora Miriam Lucila Bonilla desde hacía 9 años en Bogotá, así como declaración igualmente extrajuicio de **Eibar García de Rincón**, quien manifestó que conoció de vista y trato al señor Alberto Pinzón, constándole que este vivió con Miriam Lucila Bonilla, entre el 16 de julio de 1996 y el 30 de enero de 2008. En igual sentido declaró la señora **María Huertas de Rivera**.

Así las cosas, atendiendo a la normatividad vigente y a las consideraciones jurisprudenciales antes anotadas, en el caso concreto conforme al material probatorio obrante en el plenario, a la luz de las reglas de la sana crítica establecidas en el artículo 61 del C. P. T. y de la S.S, se advierte, contrario a lo expuesto por la recurrente, la acreditación del requisito de convivencia entre la señora Victoria y el señor Ángel

Alberto, en los 5 años anteriores a la fecha del deceso del afiliado, suceso acaecido el 30 de enero de 2008, y esto es así, en tanto, véase como en la última declaración extrajuicio rendida por la pareja el 27 de diciembre de 2007, manifestaron que hacía 34 años Vivian juntos y que de dicha unión nacieron 2 hijas, manifestación que es corroborada con las declaraciones vertidas en el proceso por parte de **Nora Patricia Torres Presiga**, cuñada de la hija del causante, quien afirmó que desde el 2002, le consta que la pareja convivió bajo el mismo techo y que no se presentó ninguna ruptura, adicional a que sabe de la enfermedad que padecía el señor Alberto, que este era conductor de la Flota Magdalena y, que en razón a su oficio se ausentaba de su residencia al corresponderle viajes por el territorio nacional, así como que este falleció en Bogotá, siendo la señora Victoria y su hija las que fueron y se encargaron de las exequias y traer las cenizas para la ciudad, supuestos de los cuales da fe, al haber vivido en el segundo piso del lugar de residencia de la pareja, sumado a que se quedó con la hija de su cuñada para poder que ella se desplazara a Bogotá. Y el señor **Pedro José Ríos Bedoya**, inicialmente compañero de labores del afiliado fallecido en la flota donde trabajaba y luego conocedor de la convivencia dada la cercanía entre su negocio y la vivienda de la pareja, esbozó que Alberto y Victoria siempre vivieron juntos, nunca se separaron, procrearon dos hijas, y que a pesar de que la pareja se fue en el 2007 del frente de su negocio, seguían asistiendo cada 15, 20 días o mes, aseverando de igual forma que dado el oficio de conductor del señor Alberto, este se tenía que ausentar por varios días de su morada, a más, que no puede perderse de vista, al ser un indicio, que la señora Victoria era la beneficiaria en salud de su compañero, luego, atendiendo los medios adosados, razonable resulta confirmar la sentencia en cuando dispuso el pago de la prestación en favor de la actora, al quedar acreditada la convivencia por un lapso superior a los 5 años antes del deceso, sin analizarse el término de duración de la misma y la porción

que le corresponde por mesada pensional, al no haber sido ello objeto de reparo.

Y frente a la señora Miriam Lucila Bonilla Pinzón, baste indicar que en el transcurso del proceso no se logra desvirtuar la conclusión a la que llegó la propia entidad en sede administrativa para el reconocimiento del derecho, esto es, que también convivió con el causante por lapso superior a 5 años anteriores al deceso, razón por la cual, al cumplirse los presupuestos establecidos por la Ley y la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, procedente resulta la confirmación de la decisión en cuanto dispuso el reconocimiento y pago de la pensión para las señora Victoria y Miriam Lucila, en el porcentaje indicado en primera instancia a partir del **30 de enero de 2008**, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente y en razón a 14 mesadas al año, al no estar dentro de la limitante establecida por el Acto Legislativo 01 de 2005, y al no haber hecho aparición el fenómeno extintivo de la prescripción en los términos del artículo 151 del CPTSS en armonía con el artículo 488 del CST., en tanto, la solicitud de reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes se elevó el 17 de marzo de 2008, negada en Resolución No.029559 del 30 de octubre de 2009, decisión frente a la cual se interpusieron los recursos de ley, desatado el de reposición en Resolución 32007 del 24 de noviembre de 2011 y el de apelación en Resolución VPB8017 del 17 de diciembre de 2013, habiéndose formulado demanda, incluso, antes de resolverse el recurso horizontal, esto es, el 28 de octubre de 2011.

En el grado jurisdiccional de consulta se realizó el cálculo del retroactivo pensional a noviembre de 2022, el cual arrojó suma similar a la liquidada por el a quo, luego, dable resulta confirmar la sentencia en dicho punto y en cuanto dispuso la deducción del valor de los aportes a salud y la

indexación de cada una de las mesadas dada su causación periódica, ello, ante la pérdida de poder adquisitivo de la moneda y el derecho de las actoras a percibir el monto real de lo debido, concepto que fue solicitado en la demanda y, de no haber sido pedido, también lo es que este no tiene que ser rogado al no comportar esta una condena adicional, sino una garantía constitucional en los términos del artículo 53 Superior, tal y como ha sido reiterado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL359-2021, SL997-2021, SL1034-2021, SL1759-2021, SL4248-2022, SL4184-2022 y SL060-2023 entre otras.

Ahora, frente a la inconformidad relacionada con el reconocimiento del retroactivo a cargo de Colpensiones y no de la señora Miriam Lucila, es de indicarse que el artículo 34 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, establece:

***Cuando se presente controversia entre los pretendidos beneficiarios de las prestaciones, se suspenderá el trámite de la prestación hasta tanto se decida judicialmente por medio de sentencia ejecutoriada a qué persona o personas corresponde el derecho.***

y el artículo 6 de la Ley 1204 de 2008,

*Definición del derecho a sustitución pensional en caso de controversia. En caso de controversia suscitada entre los beneficiarios por el derecho a acceder a la pensión de sustitución, se procederá de la siguiente manera:*

*Si la controversia radica entre cónyuges y compañera (o) permanente, y no versa sobre los hijos, se procederá reconociéndole a estos el 50% del valor de la pensión, dividido por partes iguales entre el número de hijos comprendidos. El 50% restante, quedará pendiente de pago, por parte del operador, mientras la jurisdicción correspondiente defina a quién se le debe asignar y en qué proporción, sea cónyuge o compañero (a) permanente o ambos si es el caso, conforme al grado de convivencia ejercido con el causante, según las normas legales que la regulan. **Si no existieren hijos, el total de la pensión quedará en suspenso hasta que la jurisdicción correspondiente dirima el conflicto.*** (Subrayado fuera del original).



Atendiendo dichas preceptivas, y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, se tiene que: **1.** Esta ley regula la suspensión del reconocimiento de la prestación en caso de conflicto entre cónyuge y compañera permanente o entre beneficiarias. **2.** Para evitar el sacrificio del derecho a la sostenibilidad financiera del sistema ante la reclamación y surgimiento del derecho en cabeza de **nuevos beneficiarios de la prestación económica**, y se llegue a considerar un pago doble o sin causa alguna, el legislador le permite a las entidades que reconocen la pensión, compensar las sumas de dinero con las mesadas que a futuro reciban quienes inicialmente fueron aceptados como beneficiarios, en caso de ser posible, o en su defecto, iniciar las acciones de recuperación de esos rubros pagados sin justificación, muy a pesar de que al principio los reclamantes lo hubieran hecho de buena fe o creyendo que los hechos y el momento respaldaban su solicitud. **3.** El hecho de que la prestación se reconozca inicialmente a una beneficiaria, no puede limitar la declaración del derecho de la hoy demandante en calidad de compañera permanente superviviente, pues, si se acredita la titularidad de la prestación debe ser otorgada desde el momento de su nacimiento, que en la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes, es la muerte del causante pensionado o afiliado el que marca ese derrotero. **4.** Los efectos fiscales del otorgamiento de la pensión no se pueden aplazar o trasladarlos al momento del ajuste definitivo, pues el nuevo beneficiario no puede correr con las consecuencias de ese tipo de estudio o que le imponga una carga adicional, como es, que tenga que perseguir por su cuenta los dineros entregados al beneficiario inicial, como lo pretende hacer ver el recurrente, ya que la entidad cuenta con las herramientas necesarias para sanear las finanzas de las cuales se provee el sistema pensional ( ver sentencias SL 226-2021, SL5034-2021 y SL803-2022).

Ahora, es pertinente aclarar que, si bien, se reconoce la no afectación del derecho de la nueva beneficiaria, también el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, ha establecido, de acuerdo con las particularidades de cada caso, el efecto liberatorio de la obligación de la administradora respecto de cada una de las mesadas canceladas previamente y, con ello, habilitar la posibilidad de que, aun cuando el derecho se causa al momento de la fecha de fallecimiento, el pago de la misma, se inicie en fecha diferente, supuesto que no ocurre en este caso, a fin de entender que las mesadas pagadas tienen un efecto liberatorio, en tanto, la señora Victoria, reclamó desde el inicio, siendo conocedora la entidad de la presencia de esta, así como de la señora Miriam Lucila, siendo ello tan evidente, que en la conclusión de la investigación administrativa se indicó que ante la presencia de varias beneficiarias era la jurisdicción ordinaria la que debía decidir, no obstante, de manera posterior y en forma deliberada la entidad le concedió la prestación a la señora Miriam Lucila, sin realizar ninguna reserva, luego, se tiene que la hoy demandante no se torna en una nueva beneficiaria, y si bien se podría considerar que la entidad en su momento negó la misma con fundamento en los resultados de la investigación administrativa, también lo es que, al notificarse de la existencia de este proceso, no procedió con la suspensión de la mesada que le venía cancelando a Miriam Lucila, por tal, se confirma la sentencia en cuanto dispuso el pago del retroactivo en cabeza Colpensiones y la consecuente implementación de acciones a fin de cobrarle las sumas pagadas de más a Miriam Lucila.

Finalmente, y en relación a la inconformidad planteada frente a la **imposición de costas, en la que se incluyen las agencias en derecho**, debe decirse que las consideraciones expuestas frente a la no exoneración del pago de retroactivo sirven para sustentar la imposición de las mismas, adicional a que estas son una simple consecuencia

procesal del ejercicio de la acción o de la excepción, que se traduce en una obligación que se dirige contra el patrimonio de la parte vencida, que otorga a favor del vencedor un derecho de reintegro de los gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir (auto Sala de Casación laboral Corte Suprema del 24 de enero de 2007, radicado 31.155, reiterado en sentencia SL 5141-2019), sin que sea dable entrar a analizar la buena o mala fe de la entidad en el transcurso del proceso. Y frente al monto de las agencias en derecho fijadas, baste con decir que esta no es la oportunidad procesal para objetar las mismas, dado que debe ceñirse al procedimiento señalado en el artículo 366 – 5 del Código General del Proceso.

**Costas** en esta instancia a cargo de Colpensiones, a quien se desata adversamente el recurso interpuesto (art. 365-1 del C. G. del P.), las agencias en derecho se fijan en la suma de **\$1.160.000,00** y en favor de la parte actora.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por **María Victoria del Carmen Bernal Palacio**, en contra de **Colpensiones**, al que se integró como litisconsorte necesaria por pasiva a la **señora Miriam Lucila Bonilla Pinzón**.

**Costas** en esta instancia a cargo de Colpensiones. Las agencias en derecho se fijan en la suma de **\$1.160.000,00** y en favor de la parte actora.

Rad.: 05001 3105 **010 2011 01382** 01  
Dte.: María Victoria del Carmen Bernal Palacio  
Dda.: Colpensiones  
Litisconsorte Necesaria: Miriam Lucila Bonilla Pinzón

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

**Las magistradas** (firmas escaneadas)

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL**

  
**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**

  
**CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO**

AÑO	VALOR 100%	Numero de mesadas	Vr. Mesada Victoria 72,35%	Vr. Mesada Lucila 27,65%	total adeudado victoria
2008	\$ 461.500	\$ 13	\$ 333.895	\$ 127.604,75	\$ 4.340.638,25
2009	\$ 496.900	\$ 14	\$ 359.507	\$ 137.392,85	\$ 5.033.100,10
2010	\$ 515.000	\$ 14	\$ 372.603	\$ 142.397,50	\$ 5.216.435,00
2011	\$ 535.600	\$ 14	\$ 387.507	\$ 148.093,40	\$ 5.425.092,40
2012	\$ 566.700	\$ 14	\$ 410.007	\$ 156.692,55	\$ 5.740.104,30
2013	\$ 589.500	\$ 14	\$ 426.503	\$ 162.996,75	\$ 5.971.045,50
2014	\$ 616.000	\$ 14	\$ 445.676	\$ 170.324,00	\$ 6.239.464,00
2015	\$ 644.350	\$ 14	\$ 466.187	\$ 178.162,78	\$ 6.526.621,15
2016	\$ 689.454	\$ 14	\$ 498.820	\$ 190.634,03	\$ 6.983.479,57
2017	\$ 737.717	\$ 14	\$ 533.738	\$ 203.978,75	\$ 7.472.335,49
2018	\$ 781.242	\$ 14	\$ 565.229	\$ 216.013,41	\$ 7.913.200,22
2019	\$ 828.116	\$ 14	\$ 599.142	\$ 228.974,07	\$ 8.387.986,96
2020	\$ 877.803	\$ 14	\$ 635.090	\$ 242.712,53	\$ 8.891.266,59
2021	\$ 908.526	\$ 14	\$ 657.319	\$ 251.207,44	\$ 9.202.459,85
2022	\$ 1.000.000	\$ 12	\$ 723.500	\$ 276.500,00	\$ 8.682.000,00
TOTAL GENERAL					\$ 102.025.229